

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Juan Pablo Solorza Kojakovic, en representación de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (en adelante e indistintamente CGE), quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 18.410 deduce reclamo de ilegalidad en contra de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (en adelante e indistintamente SEC), por la dictación de la Resolución Exenta N° 21.364 de 14 de diciembre de 2023, que aplica a la recurrente una multa de UTM 2.000 y en contra de la Resolución Exenta N° 36.146 de dicha Superintendencia, de 04 de marzo de 2024, mediante la cual rechazó el recurso de reposición administrativo presentado por la recurrente en contra de la primera Resolución, actuaciones que considera ilegales y, en consecuencia, solicita que se las deje sin efecto por las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

Expone que la SEC en ejercicio de sus potestades de fiscalización, procedió a revisar la información de CGE respecto del proceso de interrupciones individualizado "Interrupciones 2018" para el periodo enero a diciembre del año 2021. En este contexto, la SEC habría supuestamente detectado que CGE sobrepasó el límite máximo del indicador SAIDI (System Average Interruption Duration Index), establecido en la normativa sectorial vigente en las comunas de San Carlos y San Fabián, todas de la Región de Ñuble.

Posteriormente, la SEC formuló un cargo a CGE, fundamentado en el presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, en relación con los artículos 145° y 221 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y en relación con los artículos 72°-14 y 130° de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Señala que, respecto al cargo formulado, CGE presentó una serie de alegaciones y defensas en sus descargos. No obstante, el día 14 de diciembre de 2023, la SEC sancionó a CGE mediante la Resolución Exenta N° 21364, imputándole infracción a lo establecido en las normas antes citadas,

Agrega que, posteriormente, conociendo de la reposición oportunamente deducida por CGE, la SEC rechazó dicho recurso mediante la Resolución Exenta N° 36146 de 4 de marzo de 2024, manteniendo íntegramente la referida sanción.

Explica que el indicador SAIDI está determinado en la Normativa Técnica de Calidad y Servicios (en adelante e indistintamente NTCSD) y es un indicador de Calidad de Suministro Globales de energía, en los pares "comuna-empresa", relativo al tiempo promedio de la duración de las interrupciones y la frecuencia promedio de ocurrencia de tales interrupciones, que la SEC analiza en un periodo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBRUXPVLZKZ

de 12 meses con los datos enviados por las propias empresas distribuidoras de energía que no debiera superarse. El artículo 4-2 de la NTCSD establece los límites SAIDI en horas de acuerdo con la densidad de la red de cada par Comuna-Empresa. El Anexo de la NTCSD, clasifica cada par de acuerdo con la densidad de la red, asignándole a cada una de estas una densidad Alta, Media, Baja o Muy Baja; y de esa clasificación, dependerá el límite del indicador SAIDI, señalado en la tabla anterior.

Agrega que las interrupciones pueden tener causas externas, internas o de fuerza mayor y excluye a las solicitadas por los usuarios, las externas y las calificadas por la SEC como fuerza mayor. Además, para estos efectos, importan los incumplimientos señalados en el numeral 2 del artículo 4-2, es decir, que en un mes SAIDI se supere los límites establecidos en la normativa técnica y, además, se muestre un aumento respecto del mes anterior en que, también, se superaron los indicadores.

Expone que, durante el proceso administrativo, se le hizo presente a la SEC una serie de circunstancias que, a su juicio, no fueron debidamente consideradas. Entre estas, destaca que en la comuna de San Carlos no hubo superación del índice SAIDI en el periodo 2021, existiendo una mejora al indicador SAIDI del proceso del año 2020 respecto a la comuna de San Fabián. Asimismo, alega que en la resolución sancionatoria no es posible saber cómo se llegó al cálculo de la multa por par comuna/empresa.

Adicionalmente, el reclamante sostiene que se acreditó la existencia del pago de compensaciones a los clientes en casos de interrupciones de suministros, la inexistencia de beneficio económico para CGE y que la SEC sustentó la multa en una sanción inexistente. También se refirió al impacto de las multas SAIDI a la empresa en relación a su capacidad económica.

Alega falta de motivación del acto administrativo. Sostiene que la SEC no consideró la información proporcionada en los descargos, específicamente en lo que respecta a la supuesta falta de superación del índice SAIDI en la comuna de San Carlos. Argumenta que la SEC desestimó esta situación alegando que fue CGE quien reportó las interrupciones, sin proporcionar una justificación fundamentada sobre cómo es posible esa disparidad de resultados.

Señala que, según sus registros, el SAIDI acumulado año 2021 fue de 9 horas para la comuna de San Carlos, mientras que la SEC indica que fue de 9,1 horas. Argumenta que desconoce cuál fue el modelo de cálculo utilizado por la SEC para determinar la supuesta superación del índice SAIDI en dicha comuna, lo que constituiría una ilegalidad del acto debido a la ausencia de motivación.



En segundo lugar, el recurrente alega que se acreditó ante la SEC una mejora al indicador SAIDI en la comuna de San Fabián respecto al año 2020. Sostiene que durante el año 2020 el indicador SAIDI para esa comuna fue de 14,48 horas y en el año 2021, disminuyó a 12,45 horas. Argumenta que conforme al artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, si no existe un aumento respecto a la medición anterior, no existe incumplimiento.

Sostiene que la SEC no tuvo en consideración esta circunstancia crucial, pese a que conocía cabalmente la existencia de la Resolución Exenta N°11961 de 2022 de su autoría, que sancionó a esta comuna por el periodo analizado SAIDI 2020. Argumenta que la SEC no debía "ponderar" esta circunstancia, sino que aplicar lo indicado en el numeral 2 del artículo 4-2 de la normativa técnica.

En tercer lugar, el recurrente alega que de la resolución sancionadora no es factible saber cómo se llegó al cálculo en el *quantum* de la sanción. Sostiene que el acto que impone la multa y la que resuelve el recurso de reposición no ofrecen detalles sobre la metodología empleada para calcular el monto, lo que constituiría una evidente violación al deber legal de fundamentar la fórmula numérica utilizada para imponer la sanción.

Argumenta que la resolución sancionadora de la SEC no justifica de manera matemática la cuantía de la multa impuesta, cuando la evaluación es por comuna, lo que dificultaría la verificación de su consistencia y previsibilidad en términos que permitan aplicar criterios similares ante eventos análogos.

La reclamante alega la inexistencia de conducta infraccional anterior. Sostiene que la SEC agrava la multa considerando la existencia de una conducta anterior, basándose en la Resolución Exenta N° 11961 de 2022. Sin embargo, argumenta que dicha resolución fue dejada sin efecto por la Resolución N° 35418 de fecha 17 de agosto 2022, por lo que no podría utilizarse una sanción inexistente para agravar el *quantum* de la sanción.

Sostiene que incluso si se considerara la existencia de esa Resolución, ella sanciona a varias comunas pero no a la de San Carlos, por ende, esta última no se encuentra en situación de reincidencia, ya que la Normativa Técnica de Calidad y Servicio para Sistema de Distribución (en adelante e indistintamente NTCSD) y la jurisprudencia de la Corte Suprema indican expresamente que las sanciones relacionadas con el índice SAIDI deben aplicarse en el par "comuna-empresa".

En quinto lugar, el recurrente alega una falta de proporcionalidad de la sanción. Sostiene que CGE desembolsó por concepto de compensaciones a los clientes de las comunas \$38.276.456 de pesos en razón a interrupciones ocurridas. Argumenta que la SEC sostiene inicialmente que las compensaciones



realizadas por CGE durante el año 2021 *"solo morigerarían en parte el daño causado por las interrupciones de suministro en cuestión"*, pero luego considera que la cuantificación monetaria de la afectación de los clientes, medida por el monto de compensación recibido por cada usuario, evidencia la importancia del daño causado.

Aduce que esta aparente contradicción lleva a una interpretación ilógica, ya que la SEC sostiene que las compensaciones morigeran el daño, pero al mismo tiempo, las utiliza como evidencia del mismo para agravar la sanción. Argumenta que las compensaciones efectuadas equivalen a *"la energía no suministrada durante ese evento, valorizada a quince veces la tarifa de energía vigente durante la indisponibilidad de suministro"*, de acuerdo con el artículo 72°-20 de la Ley General de Servicios Eléctricos, por lo que es el propio legislador quien determina el daño causado por la indisponibilidad de suministro.

Finalmente, el recurrente alega que la SEC no ha considerado adecuadamente la capacidad económica de CGE. Sostiene que la SEC argumenta que la multa propuesta no comprometerá la continuidad de las operaciones de la infractora, basándose en sus ingresos por actividades ordinarias del año 2022. Sin embargo, argumenta que esta apreciación parece no tener en cuenta la estructura de ingresos de la empresa, donde la tarifa del cliente final comprende componentes de generación, transmisión y distribución y los ingresos del negocio de distribución representan una fracción relativamente pequeña, alrededor del 20% del valor total de la boleta.

Sostiene que los ingresos mencionados por la SEC no consideran costos significativos, como los de venta, gastos de administración y costos financieros. Argumenta que la SEC impuso un total de 9 multas por superación al indicar SAIDI en el periodo 2021 equivalentes a 80.000 UTM o M\$5.137.280 (según la UTM de diciembre de 2023), que representaría alrededor del 13,4% de la ganancia total de CGE en el año 2022. Esta proporción, según el recurrente, podría generar un impacto operacional significativo en la Compañía, lo que contradice la afirmación de la SEC sobre la solvencia económica de CGE y plantea dudas sobre la proporcionalidad de la multa propuesta en relación con la capacidad económica de la empresa.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declaren ilegales las Resoluciones Exentas N° 21.364 y N° 36.146 de la SEC por no ajustarse a la Constitución, a la LGSE, a sus reglamentos, a la NTCS y demás disposiciones que le corresponde aplicar, dejándolas, en consecuencia, sin efecto para declarar que se absuelva a CGE del único cargo formulado en su contra, con costas. En subsidio, solicita rebajar significativamente el monto de la multa



impuesta al mínimo que estime procedente y proporcional este Tribunal por el hecho que se imputa a CGE, a través de un único cargo formulado.

Segundo: Que a folio 7 informa doña Marta Cabezas Vargas, Superintendente de Electricidad y Combustibles, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES, quien solicita el rechazo del recurso de deducido, argumentando que la acción es infundada y que lo obrado por el organismo fiscalizador en la expedición de los actos administrativos impugnados se ha ajustado plenamente a la normativa vigente, sin vulnerar los principios y normas invocados por la reclamante. Opone las siguientes excepciones y defensas para solicitar el rechazo del recurso: 1) Que el procedimiento sancionatorio se ajustó a la normativa vigente; 2) Que los actos administrativos impugnados se encuentran suficientemente motivados; 3) Que se respetó el principio de proporcionalidad en la imposición de la multa; 4) Que la conducta anterior de CGE fue debidamente considerada; y 5) Que la capacidad económica de la empresa fue correctamente evaluada.

En cuanto a la primera excepción, la SEC sostiene que el procedimiento sancionatorio se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Señala que conforme al artículo 2º de la Ley N° 18.410, su objeto es fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad. Asimismo, indica que el Título IV de dicha ley la faculta para imponer sanciones a las entidades sujetas a su fiscalización que incurran en infracciones a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos.

Explica que el procedimiento sancionatorio se inició con la formulación de cargos, donde se individualizó al presunto responsable y se enunciaron de manera clara y precisa los hechos constitutivos de infracciones y las disposiciones que se consideraban infringidas. Posteriormente, se dio traslado a CGE para que presentara sus descargos, los que fueron debidamente analizados y ponderados. Finalmente, se emitió la resolución que impuso la sanción, la cual podía ser impugnada mediante los recursos establecidos en la ley.

Respecto a la segunda excepción, la SEC argumenta que los actos administrativos impugnados se encuentran suficientemente motivados. Sostiene que tanto la resolución sancionatoria como la que resolvió el recurso de reposición contienen una exposición clara y detallada de los hechos y fundamentos jurídicos que justifican la decisión adoptada. La SEC afirma que se pronunció sobre todas



las alegaciones de CGE, explicando las razones por las cuales fueron desestimadas.

En relación con la tercera excepción, la SEC defiende que se respetó el principio de proporcionalidad en la imposición de la multa. Argumenta que se consideraron todas las circunstancias establecidas en el artículo 16 de la Ley N° 18.410 para determinar la cuantía de la sanción. Además, señala que la infracción fue calificada como gravísima de acuerdo con el artículo 15 N° 4 de la misma ley, lo que permitía imponer una multa de hasta 10.000 UTA (120.000 UTM). Sin embargo, la multa aplicada fue de 2.000 UTM, lo que representa apenas un 1,6% del máximo legal permitido.

En cuanto a la cuarta excepción, la SEC sostiene que la conducta anterior de CGE fue debidamente considerada al momento de determinar la sanción. Explica que se tuvo en cuenta que la empresa no gozaba de una irreprochable conducta anterior, ya que había superado el indicador SAIDI en la comuna de San Fabián en los periodos 2019, 2020 y 2021.

Finalmente, respecto a la quinta excepción, la SEC argumenta que la capacidad económica de CGE fue correctamente evaluada. Señala que se consideraron los datos financieros proporcionados por la propia empresa en su Memoria Anual, los cuales demuestran que cuenta con una amplia capacidad económica que le permite hacer frente a la multa impuesta sin comprometer su operatividad.

En cuanto a los hechos, la SEC expone que mediante Oficio Circular N° 12.622 de 18 de junio de 2018, remitió a las concesionarias de servicio público de distribución el Documento Técnico denominado "Consideraciones para el Cálculo del SAIDI y SAIFI", referido en el artículo 4-2 de la NTCS. Posteriormente, a través de la Resolución Exenta N° 27017 de 31 de diciembre de 2018, se estableció el proceso de información denominado "Índices de Continuidad de Suministro", mediante el cual las empresas concesionarias deben remitir mensualmente información sobre las interrupciones de suministro eléctrico.

La SEC procedió a revisar la información proporcionada por CGE a través del proceso "Interrupciones 2018", pudiendo establecer que, para el periodo enero a diciembre de 2021, en la Región de Ñuble -comunas San Carlos y San Fabián- la empresa había sobrepasado el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente. Con estos antecedentes, el 27 de septiembre de 2022, mediante Oficio ORD. N° 139.751, se formuló a CGE el cargo por incumplimiento de lo establecido en el artículo 4-2 de la NTCS, en relación con los Artículos 145°, 221° y 323° letra e) del Reglamento de la Ley General de Servicios



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBRUXPVLZKZ

Eléctricos y los artículos 72°-14, 130° y 225° letras u), y w) de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Aduce que CGE presentó sus descargos con fecha 20 de octubre de 2022 y tras analizar los antecedentes, la SEC concluyó que correspondía hacer exigible la responsabilidad de CGE respecto de las infracciones imputadas. En consecuencia, mediante Resolución Exenta Electrónica N° 21364 de 14 de diciembre de 2023, se aplicó a la reclamante una sanción de multa equivalente a 2.000 UTM, atendido el carácter gravísimo de las infracciones constatadas.

Añade que CGE interpuso recurso de reposición contra dicha sanción, solicitando se dejara sin efecto la multa o se rebajara considerablemente su cuantía. Este recurso fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 36146 de fecha 4 de marzo de 2024, por no aportar antecedentes adicionales distintos a los tenidos a la vista al emitir la resolución impugnada.

En lo relativo a los fundamentos de hecho y de derecho para solicitar el rechazo del reclamo, explica que respecto a la supuesta falta de superación del índice SAIDI en la comuna de San Carlos, la SEC sostiene que el cálculo se realizó con base en la información proporcionada por la propia empresa. Explica que para el cálculo del indicador SAIDI solo se consideran aquellas interrupciones que ocurren en Estado Normal, excluyéndose las interrupciones ocurridas durante un Estado Anormal. La SEC señala que es la misma empresa la que informa el Estado del Sistema de distribución al momento de informar las interrupciones.

Así, en relación con la mejora del indicador SAIDI en la comuna de San Fabián respecto al año 2020, la SEC argumenta que dicha mejora no constituye un factor eximente de responsabilidad. Señala que CGE ha superado el indicador SAIDI en los periodos 2019, 2020 y 2021 en dicha comuna, lo que demuestra un incumplimiento sostenido en el tiempo.

Sobre la alegación de que no es posible conocer cómo la SEC calculó el *quantum* de la sanción, el organismo fiscalizador sostiene que los considerandos 9° y 10° de la Resolución sancionatoria explican detalladamente los elementos que fueron revisados para definir la cuantía de la multa. Además, argumenta que se analizaron y ponderaron todas las circunstancias establecidas en el artículo 16 de la Ley N° 18.410.

En cuanto a la conducta anterior, la SEC aclara que se refiere a la conducta presentada por la reclamante con anterioridad a esta infracción, considerando no solo aquellas infracciones de la misma naturaleza o cometidas en la misma zona de concesión, sino todas las infracciones cometidas en un determinado período de tiempo; agregando que CGE no goza de una irreprochable conducta anterior.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBRUXPVLZKZ

Respecto al principio de proporcionalidad, la SEC argumenta que la sanción impuesta se ajusta a lo establecido en los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley N° 18.410. Señala que la infracción fue calificada como gravísima, lo que permitía imponer una multa de hasta 120.000 UTM, aplicándose en este caso una multa de 2.000 UTM, que representa apenas un 1,6% del máximo legal.

En relación con la importancia del daño causado y la consideración del pago de compensaciones, la SEC sostiene que las compensaciones no constituyen una causal de justificación de los ilícitos administrativos. Explica que la compensación es un derecho de los usuarios establecido por ley y no puede ser considerada para efectos de atenuar la conducta infraccional.

Argumenta, en relación a la capacidad económica de CGE que los datos financieros considerados se obtuvieron de la Memoria Anual de la empresa, los cuales demuestran que cuenta con una amplia capacidad económica que le permite hacer frente a la multa impuesta sin afectar su operatividad.

Concluye que ha actuado con estricto apego y en cumplimiento de sus facultades legales, respetando los rangos legales en materia de imposición de sanciones y considerando debidamente todas las circunstancias del artículo 16° de la Ley N°18.410. Por tanto, solicita que la acción de reclamo deducida sea rechazada en todas sus partes por ser infundada y carecer de sustento válido para su interposición, con costas.

Tercero: Que el artículo 2° de la Ley N° 18.410 dispone que corresponde a la reclamada fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas del ámbito de su competencia, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones.

De acuerdo a previsto en el artículo 3 N° 34 de la Ley en comento, la SEC está facultada para aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar e impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización. Así también, el Título IV de la mencionada ley, faculta a la Superintendencia para imponer a las personas o entidades sujetas a su fiscalización o supervisión, que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas, entre otras, con electricidad o bien en incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por esta entidad, una o más de las sanciones que allí se señalan, sin perjuicio de las establecidas específicamente en dicha ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios.

Cuarto: Que como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia en asuntos similares, el presente arbitrio de reclamación es de derecho estricto y, por



ende, corresponde analizar la legalidad del actuar de la recurrida y determinar si aquella se encuentra conforme al ejercicio de sus facultades acorde a la legislación vigente. Por consiguiente, no se trata de una acción para discutir el mérito de la decisión adoptada, sino establecer si los actos impugnados están o no conforme a derecho.

Quinto: Que las decisiones administrativas objeto del presente arbitrio dicen relación con la Resolución Exenta N° 21.364, de 14 de diciembre de 2023, que aplicó una multa de 2.000 unidades tributarias mensuales a la empresa y con la Resolución Exenta N° 36.146 de 04 de marzo de 2024, que rechazó el recurso de reposición administrativo deducido en contra de la primera, ambas dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que inciden en el proceso de investigación de cumplimiento de los indicadores SAIDI y SAIFI exigibles para el periodo enero a diciembre de 2021, en el cual la autoridad comprobó que en las comunas de San Carlos y San Fabián, región del Ñuble, la Compañía General de Electricidad -CGE- sobrepasó el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente, esto es por incumplir el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad del Servicio para el Sistema de Distribución, en relación con los artículos 145 y 221 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y 72-14 y 130 de la citada Ley.

Sexto: Que en cuanto a las alegaciones que plantea la reclamante, en lo relativo a que las Resoluciones Exentas impugnadas carecerían de la debida motivación al no hacerse cargo de su defensa, en particular al no haber considerado lo alegado en sus descargos para demostrar el cumplimiento de la norma técnica; esto es, que en la comuna de San Fabián el indicador mejoró si se compara con el año anterior y, en lo atinente a la comuna de San Carlos que no superó el estándar exigible.

En la Resolución sancionatoria la autoridad en el punto 7° describe los hechos y argumentos esgrimidos por el reclamante en sus descargos.

Séptimo: Que la Resolución cuestionada analizando los descargos de CGE, la reclamada destaca -motivo 8°- que ha tenido en cuenta los antecedentes recabados durante la investigación -los que cita en el acto administrativo- y que para el cálculo del indicador SAIDI considera la información proporcionada por la misma empresa y, especialmente, el tiempo promedio de interrupción por cliente en un periodo de 12 meses. Por consiguiente, los actos administrativos explican el origen de la información y la forma de cálculo del criterio cuestionado, sobre la base de la normativa vigente y comunicada previamente a las empresas Distribuidoras.



Por otro lado, también se indican las circunstancias agravantes de la conducta de la reclamante -distribuidora- en función del desempeño en periodos de control anteriores y la realización de acciones de inversión, operación y mantenimiento del Sistema.

La autoridad se hace cargo de la forma de cálculo de los indicadores aplicables, señalando que excluyó aquellas interrupciones del servicio calificadas como Fuerza Mayor o Caso Fortuito y que *“solo se consideran las interrupciones que ocurren en Estado Normal, estado que según las disposiciones contenidas en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para sistemas de Distribución, corresponde a un “Estado del Sistema de Distribución en que se disponen de los recursos necesarios y suficientes para prestar el servicio de distribución eléctrica de acuerdo a las exigencias de calidad establecida en la presente NT y en la normativa vigente”, excluyéndose del cálculo de dicho indicador todas las interrupciones ocurridas durante un Estado Anormal, estado que según la misma Norma Técnica corresponde a un “Estado del Sistema de Distribución que se alcanza luego de una o más interrupciones de Suministro que afectan a la Red de Distribución en Estado Normal y en donde se requieren recursos adicionales con el objeto de restablecer dicho estado”.*

La recurrida hace referencia a la información remitida por la empresa respecto de ambas comunas la que, en definitiva, sustenta la sanción, agregando que *“del análisis de los datos e información proporcionada por la misma empresa, así como la metodología de cálculo del indicador DAIDI, que para el cual no se consideran interrupciones de calificación de “Fuerza Mayor”, esta Superintendencia concluye que el cargo formulado, tiene plena validez y fundamento sólido e indiscutible. A partir de dicho argumento, la línea argumental de los descargos de la empresa busca que se consideren elementos que morigerarían la responsabilidad de este, pero sin descartar la infracción”.*

En el contexto descrito, es evidente que el sistema de control funciona sobre la base de los reportes que la SEC recibe, y desde ahí se extrae la información de la distribución porcentual de las horas totales de interrupción que explican el desempeño de la empresa en cuanto al tiempo promedio de interrupción del suministro de electricidad tolerado, considerando solo aquellas interrupciones verificadas en el Estado del Sistema de Distribución Normal y de Calificación Interna, para el período comprendido entre enero a diciembre de 2021.

Por otro lado, al resolver el recurso administrativo la recurrida reitera el cálculo efectuado, conforme a los datos entregados por la empresa distribuidora, agregando que es la propia reclamante quien acepta que la diferencia con la



autoridad estaría dada por no haber considerado las alegaciones de algunos casos de Fuerza Mayor alegados por esa parte, es decir, el reproche dice relación con un aspecto técnico entregado a la competencia de la autoridad de control, la que descartó la configuración de algunas alegaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor de acuerdo a la regulación vigente. Además, en relación a la comuna de San Fabián, la reclamante solo arguye haber mejorado el Indicador respecto al año anterior fiscalizado -ahora 12,45 horas- es decir, acepta que excedió el máximo de interrupciones permitido.

Octavo: Que de lo anterior se concluye que la autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, aplicó la Norma Técnica de Calidad del Servicio para el Sistema de Distribución, excluyendo las interrupciones ocurridas durante un Estado Anormal, consideraron aquellas que correspondían a interrupciones calificadas como “Internas”, que son precisamente las que establece el sistema SAIDI, y conciernen al ámbito de control de la empresa. El valor del SAIDI cuestionado solo permite advertir que la reclamante no adoptó en su oportunidad las acciones pertinentes para evitar la interrupción del servicio y así dar cumplimiento a los indicadores técnicos vigentes para el año 2021, toda vez que se registraron malos resultados en el SAIDI en las comunas de San Carlos y San Fabián. Además, como lo explica la recurrida, en el proceso de fiscalización la autoridad empleó los mecanismos vigentes para contabilizar y aplicar el correspondiente descuento al indicador, señalado en el artículo 4-1 de la NTCS para SD de los casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, considerando únicamente interrupciones intempestivas de suministro de electricidad imputables a la empresa, que afectaron a los usuarios de las comunas indicadas.

Noveno: Que finalmente en este motivo 9° del acto administrativo reclamado la reclamada se hace cargo de la entidad de la sanción y su determinación para el caso concreto, analizando los criterios y circunstancias de los artículos 15 y 16 de la Ley N° 18.410, teniendo presente que en este caso la infracción afectó al 14.2% de los usuarios abastecidos por la empresa en la Región de Ñuble.

En el punto 10° del acto sancionador, la reclamada alude a las compensaciones que hace valer la empresa respecto de los clientes de las comunas señaladas, concluyendo que estos pagos -obligatorios para la distribuidora- no eliminan por completo el perjuicio ocasionado a los clientes, por cuanto es un hecho acreditado que la empresa alteró la continuidad del servicio más allá de los estándares permitidos por la norma, afectando negativamente a los consumidores.



También se hace cargo la autoridad de los restantes criterios legales para imponer la sanción y determinar el *quantum* de la multa, entre ellos el beneficio económico obtenido con la infracción, la intencionalidad en la comisión de la infracción, aludiendo al deber de cuidado exigible, asentando el incumplimiento culpable de la reclamante quien se encuentra obligada a otorgar un servicio de calidad, lo que en el caso de la especie se incumplió. Alude también a la conducta anterior de la empresa distribuidora y a su capacidad económica.

Décimo: Que de lo que se viene razonando, es dable concluir entonces que las Resoluciones impugnadas, se hicieron cargo de todas las alegaciones y descargos de la reclamante -la que no acompañó nuevos antecedentes en su recurso de reposición- cumpliendo además la reclamada el deber de motivación exigido en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, lo que lleva necesariamente a desestimar las alegaciones vertida en el presente reclamo.

Undécimo: Que, en cuanto a la falta de proporcionalidad de la sanción, la reclamada pondera, además, que la reclamante tiene un alto grado de conocimiento de su función como concesionaria de un servicio público, lo que deja en evidencia que conocía las exigencias de Calidad del Suministro y del desempeño de su Sistema de Distribución, exigencias que le son imputables, pues opera sus instalaciones y sabía de las características técnicas de la actividad, conforme a la reglamentación que la rige. Todo lo anterior implica un deber de cuidado en el desempeño de su giro -función pública- a fin de evitar conductas tipificadas, las que de verificarse configuran la culpa infraccional -como se acreditó en este caso- agravada por el conocimiento de las normas técnicas y la calidad del servicio que le es exigible a la empresa.

Duodécimo: Que la Resolución N° 36.146, de 4 de marzo de 2024, ratifica los fundamentos del acto objeto del reposición, desarrollando, analizando y ponderando el tiempo total promedio de duración de la interrupción que sufre un usuario en un período determinado, conforme al indicador SAIDI, relevando la importancia del daño causado a través de la afectación monetaria de los clientes por la valorización de la energía no suministrada a los consumidores, las que si bien han sido morigeradas por las compensaciones efectuadas por la empresa, ello siendo un imperativo legal no elimina por completo el perjuicio ocasionado, por estar probado que se alteró la continuidad del servicio más allá de los estándares permitidos por las normas técnicas.

Reafirma, también, los motivos sobre el beneficio económico de la empresa, el alto grado de conocimiento de ésta por su especialidad en la materia, ponderando su capacidad económica, ampliamente conocida a través de su última Memoria Anual disponible en su sitio Web y en el de la Comisión para el Mercado



Financiero, año 2022, donde se indica que la empresa obtuvo una utilidad distribuible que asciende a la suma de \$38.433.181.000.

En relación a la inexistencia de una conducta anterior por parte de CGE, señala la reclamada que en materia de fiscalización del cumplimiento de las exigencias de Calidad de Suministro, en particular respecto del indicador global SAIDI, se consideró que mediante Resolución Exenta Electrónica N° 11.961 de 2022, la empresa recurrente fue sancionada por incumplimiento de dicho indicador en el año 2021, también en la Región de Ñuble, lo que se tuvo en cuenta para determinar el monto de la multa aplicable. Si bien la reclamante acreditó que esa sanción fue dejada sin efecto mediante Resolución exenta N° de xxx, ella no altera la conducta infraccional previa de la empresa.

En efecto, es la propia reclamante quien acepta la existencia de incumplimientos anteriores en la comuna de San Fabián, razón por la cual mal puede ahora desconocer su actuar desde el año 2019, a lo cual se agrega que para determinar el *quantum* de la sanción, conforme a los criterios legales, lo importante es verificar si la empresa goza o no de irreprochable conducta anterior, no siendo relevante la zona de concesión en que se verifican tales incumplimientos previos a la normativa eléctrica o si se trata del mismo incumplimiento, pues ha de estarse a la conducta trasgresora de la legalidad e imputable a la empresa, lo que en este caso se encuentra acreditado, como consta de los documentos acompañados a la causa por el reclamado en escrito folio 21.

Décimo tercero: Que, por lo anteriormente considerado, los actos recurridos, se encuentran suficientemente fundamentados en cuanto a la fijación y proporción de la multa fijada (2.000 UTM), habiendo considerado la entidad fiscalizadora la gravedad de los hechos que fueron motivo del cargo y las normas infringidas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley N°18.410, la que se encuentra dentro del rango legal para faltas gravísimas.

Décimo cuarto: Que acorde se ha venido razonando, se desestimaré el recurso de reclamación intentado, por estimar que la SEC con su actuar, se ha ajustado a derecho, no advirtiéndose ilegalidad alguna, pues se ha dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia, en el proceso administrativo de fiscalización dentro del ámbito de la competencia de la autoridad reclamada, observándose el principio del debido proceso administrativo, donde la reclamante tuvo la posibilidad de ejercer sus derechos, imponiéndose en definitiva una multa por infracciones calificadas por la ley como gravísimas, dentro de los márgenes y parámetros establecidos por la legislación aplicable a la materia.



Por estas consideraciones y, además, lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, **se rechaza**, el reclamo de ilegalidad deducido en representación de la Compañía General de Electricidad S.A., en contra de la Resolución Exenta N° 21.364 de 14 de diciembre de 2023, que aplicó una multa de 2.000 Unidades Tributarias Mensuales a la empresa y respecto de la Resolución Exenta N° 36.146 de 4 de marzo de 2024, que rechazó el recurso de reposición administrativo deducido en contra de la primera, ambas dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra señora González Troncoso, quien no firma por ausencia.

Ingreso Corte N° 206-2024 Contencioso Administrativo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBRUXPVLZKZ

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, dieciseis de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a dieciseis de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBRUXPVLZKZ